

# Los Fracayos de Nuestra América

*Carlos Sabino*

Quien haya vivido los últimos veinte años en nuestra región sentirá, probablemente, que a pesar de los aparentes cambios que se han producido en casi todos los países, nuestra situación no se ha modificado en lo fundamental: seguimos siendo un escenario secundario en el amplio proceso de globalización, un conjunto de naciones que busca ansiosamente su desarrollo económico pero que no termina de lograr el anhelado "despegue", que mantiene apenas sus instituciones democráticas, que avanza por derroteros zigzagueantes hacia un destino imposible de descifrar.

Esa, me parece, es la sensación elemental, primaria, que se extiende desde hace algún tiempo entre nosotros. Exitos y fracasos se suceden de un modo que parece impredecible y que nos lleva a desconfiar de teorías e ideologías, de lo que ayer parecía una certeza y hoy se revela como una simple falacia, de esperanzas que naufragan y producen desconcierto y preocupación. No son pocas las personas que, con algo de angustia, piensan que tanto el modelo de la CEPAL de los años sesenta como el neoliberalismo de los noventa han resultado inadecuados para nuestra región, que hay que buscar otros caminos, aunque no se tenga mayor idea de cómo encontrar esa nueva y mágica panacea.

## 1. Una breve recapitulación

Los hechos, en un primer y rápido examen, podrían tal vez validar esta actitud. Las políticas orientadas hacia un crecimiento basado en la industrialización sustitutiva, que se apoyaba en un mercado interno protegido por fuertes aranceles, tuvieron cierto éxito en los sesenta y parte de los setenta, al menos en varios países importantes como México y Brasil, pero se mostraron luego incapaces de proporcionar el flujo de divisas necesario para lograr una sólida acumulación de capital e impulsar así el crecimiento. El nacionalismo económico, idea esencial de este modelo, se acompañó además de un fuerte intervencionismo estatal que generalmente fue justificado por razones sociales: necesidad de subsidiar el consumo de los más pobres, de regular los mercados para protegerlos, de redistribuir la riqueza, de quitar poder a las oligarquías nativas.

El resultado de esta larga etapa, que en algunos casos se extendió desde la postguerra hasta el comienzo de los años ochenta, fue sin duda alguna decepcionante: no sólo los países no alcanzaron la plena industrialización que se fijaron como meta, no sólo el crecimiento se fue deteniendo poco a poco, sino que además América Latina arribó al

final del período con una distribución del ingreso que es la más desigual de todo el mundo. Este modelo de desarrollo concluyó, para colmo, cuando a comienzos de la década de los ochenta estalló una crisis profunda y casi inmanejable: la deuda externa que habían contraído los estados de la región, ante un alza coyuntural de los intereses, resultó de pronto imposible de pagar, creando una situación en la que todos los indicadores económicos y sociales se desplomaron. Comenzó así la llamada *década perdida*.

La mayoría de los gobiernos tomó al comienzo medidas de emergencia, pero sin comprender la magnitud de los problemas que enfrentaban y la consecuente necesidad de modificar radicalmente el modelo de gestión pública anterior. Sólo varios años después, cuando la hiperinflación, el desempleo y el estancamiento mostraron que se seguía un curso errado, comenzó lo que suele llamarse la época de las reformas de mercado en América Latina. Resistidas por una izquierda para la cual el estatismo es casi un reflejo condicionado y por grupos de interés tan variados que incluyeron a los sindicalistas, los banqueros y los profesores universitarios, las reformas sin embargo se comenzaron a ejecutar en casi todas partes, tal vez porque en el fondo no había más remedio y algo -cualquier cosa- era necesario hacer para salir de una crisis que cada año parecía profundizarse más.

De suma importancia en este punto es destacar que esas reformas, como decimos, se pusieron en práctica ante todo por lo apremiante y crítica que se había tornado la situación y no porque se hubiese producido un viraje fundamental en las ideas dominantes en la opinión pública: no fue una convicción ideológica firme y meditada, ni la presión de algún país u organismo internacional, el verdadero motor de este proceso, sino la constatación de que ya no se podía seguir con inflaciones que superaban el mil por ciento, tratando de conseguir nuevos préstamos que nadie estaba dispuesto a conceder -y en todo caso era imposible pagar- con economías estancadas que ni siquiera podían proporcionar los fondos para mantener el gasto público dentro de cierta normalidad. No sólo en Latinoamérica se hicieron de este modo las reformas mencionadas: "en todo el mundo el pragmatismo, no el fervor ideológico, fue el espíritu que guió la liberalización", nos dice un autor que ha estudiado estos procesos a escala internacional.

No fueron los "neoliberales" ni, más exactamente, partidos o personalidades liberales favorables al mercado, los que ejecutaron los paquetes de ajuste, tantas veces señalados como hambreadores pero tan necesarios en aquellos momentos catastróficos: fueron líderes populistas, o que provenían de partidos de centro izquierda, o que pregonaban el más abierto pragmatismo, los que se hicieron cargo de la situación. No fue el FMI el que intervino presuroso para imponer recetas de mercado a los países que no podían pagar la deuda ni el que propuso el listado de medidas que luego se irían a conocer como el "consenso de Washington". El FMI acudió, es cierto, a socorrer financieramente a los países, pero lo hizo a pedido de estos, cuando los gobiernos pedían fondos desesperadamente porque ya no tenían dinero -a veces- ni para pagar a los empleados públicos. Y no siempre el Fondo propuso soluciones

liberales, como cierta difundida leyenda se empeña en relatar: sus funcionarios pidieron a los gobiernos algo tan sencillo (y tan sensato) como procurar el restablecimiento del equilibrio presupuestario, aunque a veces cayeran en la insensatez de recomendar aumentos de impuestos en los momentos de mayor recesión o desecharan medidas audaces, como las del paquete fiscal boliviano (1985) o la convertibilidad argentina (1991), que en su momento resultaron ciertamente útiles y necesarias.

En todo caso las reformas se hicieron casi siempre con una cierta reticencia, como desconfiando del mercado, como si se tratara de mantener en todo lo que fuera posible el modelo económico y político anterior. Y, a pesar de sus obvias limitaciones, es preciso reconocer que esas medidas lograron siempre sus objetivos inmediatos: impusieron cierto control sobre los gastos estatales, redujeron drásticamente la inflación, lograron en algunos casos el aumento de la inversión privada y buenas tasas de crecimiento económico durante algunos años.

## 2. Lo que se hizo y lo que no se hizo

A pesar de estos aspectos positivos, sin embargo, la imagen que muchos tienen de este proceso es hoy francamente negativa. Esto sucede en buena medida porque los fracasos, sin duda, fueron mucho más espectaculares que los logros: estos últimos fueron más "negativos" que positivos, en el sentido de que sirvieron para superar problemas críticos o evitar males como la inflación, pero no así para asegurar el crecimiento sostenido o la disminución de la pobreza que -como es comprensible- eran las verdaderas metas a las que se procuraba llegar.

Las causas de este comportamiento tan poco alentador, tan limitado en sus progresos, se relacionan de un modo directo con varios factores, disímiles en su naturaleza e importancia. Un primer elemento, de peso coyuntural nada más pero importante en el corto plazo, fue que la mayor apertura de los mercados internacionales, en un proceso de creciente interconexión que es parte de la globalización, hizo más vulnerables a las economías de América Latina respecto a crisis financieras que se producían en otras partes de la región o en naciones completamente alejadas de su tradicional zona de intercambios. La debacle mexicana de fines de 1994, el llamado *efecto tequila*, afectó fuertemente las finanzas argentinas durante 1995, produciendo una elevación del desempleo que luego -debido a otros factores, más estructurales- resultaría bastante difícil de revertir. La crisis del sudeste asiático, que comenzó en Tailandia a fines de 1997, repercutió negativamente en Brasil, produciendo a los pocos meses una fuerte devaluación la cual, a su vez, perturbó fuertemente la convertibilidad de Argentina, estrechamente ligada a ese país dentro del Mercosur. En fin, casi todas las naciones de la región -ya afectadas en mayor o menor medida por estas crisis, y por la que se produjo luego en Rusia- han visto disminuido su crecimiento luego del horroroso atentado de septiembre de 2001, que indirectamente ha llevado a un período de recesión -o de disminución del crecimiento- de verdadero alcance mundial.

No debe exagerarse, sin embargo, el peso que haya podido tener un entorno internacional que en los últimos años resultó poco favorable. Si las economías locales no hubiesen sido tan frágiles, si no hubiesen estado tan comprometidas en cuanto al déficit fiscal y el endeudamiento internacional, las repercusiones de las sucesivas crisis no hubiesen sido tan notables. Más bien lo que puede decirse es que las fluctuaciones de los mercados mundiales sirvieron para poner de relieve, simplemente, lo poco que se había progresado en cuanto a las reformas, lo limitado y contradictorio de su aplicación. Chile, que en cambio había avanzado mucho más en ese proceso, tuvo un comportamiento mucho mejor, mostrando cierta inmunidad a los vaivenes de las finanzas internacionales.

El ejemplo argentino, por su parte, nos resultará útil para expresar con más detalle lo que afirmamos en el párrafo anterior. Es verdad que Argentina bajó sus barreras arancelarias, pero lo hizo muy limitadamente, en el marco de un Mercosur que conserva todavía, en el actual contexto internacional de disminución del proteccionismo, aranceles relativamente altos: quedó así estrechamente ligada al Brasil, un país que al devaluar su moneda de un modo tan drástico, afectó su comercio internacional e indirectamente su producción; es cierto también que la convertibilidad disminuyó su riesgo-país y que la amplia ola de privatizaciones de los noventa redujo la carga que imponían muchas empresas ineficientes sobre el presupuesto público: pero esto no resultó suficiente para cambiar el comportamiento de un estado que siguió creciendo a ritmo acelerado y que, pudiendo acudir otra vez al financiamiento internacional, siguió endeudándose de un modo que no cabe calificar sino como irresponsable.

Este caso nos indica que, en líneas generales, ni siquiera las reformas más elementales fueron realizadas con la consistencia y la profundidad necesarias para garantizar un comportamiento económico estable. Ni la reducción del déficit fiscal, lograda en los primeros años, se mantuvo en ninguna parte de un modo sistemático, ni se controló el endeudamiento internacional, ni se prosiguió a fondo con una política de apertura económica que expandiera de un modo continuo el comercio internacional. Las privatizaciones se hicieron por lo general con fines fiscalistas, perfectamente comprensibles en momentos de crisis, pero sin tratar de abrir realmente los mercados salvo en algunos pocos sectores específicos. Se crearon así nuevos monopolios, ahora privados, que en algunos casos -como el de los ferrocarriles argentinos- llegaron incluso a recibir cuantiosos subsidios por parte del estado. Es verdad que, en la mayoría de los casos, una apropiada disciplina monetaria impidió que apareciera otra vez el flagelo de la inflación: pero es evidente que este único logro, por más importante que haya sido, no pudo servir por sí solo como garantía para acelerar el crecimiento, disminuir el desempleo o aumentar el flujo de las inversiones que necesitaban sin duda las economías latinoamericanas.

Si escasos fueron los pasos dados en materia de estas reformas coyunturales o de corto plazo, que suelen llamarse también de primera generación, mucho menos aún fue lo que se hizo en materia de los cambios más estructurales, o de segunda generación, que

era necesario efectuar para abandonar realmente el modelo estatista e intervencionista ya fracasado sin atenuantes en los años ochenta.

Hemos señalado, en una síntesis que hicimos en un trabajo anterior que estas reformas de más largo plazo incluían: la desregulación de la economía, nuevas políticas sociales, la reforma laboral, el cambio del sistema de seguridad social y reformas políticas e institucionales, aparte de la ya mencionada privatización de empresas estatales con el objeto de cambiar el balance entre el estado y la sociedad civil. En ninguno de estos planos, debemos reconocerlo, se hicieron cambios significativos en América Latina durante los últimos años.

La propia orientación de los gobiernos, inclinados más a políticas de centro izquierda con fuertes resabios populistas, explica en buena medida esta casi total ausencia de resultados y se convierte en un elemento fundamental para negar el pretendido fracaso de un "neoliberalismo" que, en realidad, nunca existió. Porque en la reiterada crítica que suele hacerse a las reformas se tiende a caer en simplificaciones exageradas, que terminan confundiendo los términos fundamentales del debate: muchos asumen una equivalencia entre las políticas del Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo, otros llaman neoliberal a la simple idea de tener presupuestos balanceados o favorecer las inversiones privadas, hay quienes hasta piensan que el autoritarismo de derecha - como el de Pinochet y hasta cierto punto el de Fujimori- forma parte de una ideología neoliberal.

Se tienden a mezclar así, -de modo indiscriminado y a veces hasta interesado- problemas técnicos, políticos e ideológicos de muy diversa naturaleza y entidad. Porque asumir que un déficit o una deuda no pueden ampliarse indefinidamente, por más que haya pobreza o desempleo, no es otra cosa que decir una verdad elemental, en realidad más aritmética que económica, que nada tiene que ver con ideas liberales o de libre mercado. Asimilar al FMI a una cierta ideología, cuando éste es un ente manejado por una burocracia internacional y no una institución ideológica o política, es como buscar un chivo expiatorio externo, vinculado además a los Estados Unidos, para hacerlo culpable por los fracasos locales. Conocemos perfectamente de los graves errores cometidos por esta institución, de sus consejos a veces impracticables y a veces intervencionistas, de sus vaivenes en las recomendaciones, del profundo riesgo moral que entrañan sus rescates. Pero nada de esto excusa a los gobiernos locales por los errores cometidos y nada de esto, por cierto, tiene que ver con el liberalismo o el neoliberalismo que se agitan como fantasmas ante la opinión pública: ¿cómo puede ser liberal pedir aumentos de impuestos cuando esta medida, precisamente, se aleja del ideal de un estado limitado que es común a todos los liberales? ¿Cómo pueden llamarse liberales a las recomendaciones de política social que se basan en aumentar los subsidios directos para ayudar a combatir la pobreza, cuando los liberales nos hemos opuesto sin excepción a reforzar el paternalismo estatal, a las distorsiones que provocan los subsidios, a la dependencia que crean políticas asistencialistas que nunca han eliminado la pobreza en ninguna parte?

Por eso, para concluir este punto, cabe recordar otra vez que **las políticas liberales no se llevaron a la práctica en las naciones latinoamericanas**: lo que hubo fue una serie de reformas, bien orientadas en la mayoría de los casos, pero que fueron muy limitadas y se realizaron siempre con bastante reticencia. Lo peor, sin duda, es que estas políticas casi siempre se abandonaron apenas culminó la situación de crisis que fue el elemento circunstancial que propició su adopción.

### 3. Lo que falta por hacer

Decíamos que, en la pasada oleada de reformas, no se efectuaron aquéllas que se denominan como de segunda generación, las que se refieren a los aspectos más estructurales o de fondo. Al suceder las cosas de este modo el anterior estado intervencionista quedó severamente alterado pero, lamentablemente, sin que se alcanzara a desmantelarlo en su esencia. La mayoría de los países quedó así en una especie de limbo, de tierra de nadie: no se arribó a un nuevo modelo de sociedad, donde se estableciese un diferente tipo de estado y renovadas relaciones entre éste y la sociedad civil, sino que prevaleció una combinación muy poco coherente de medidas de libre mercado con una estructura política e institucional que respondía de hecho a la situación anterior. La crítica al "modelo" que tan apasionadamente se hace en algunas partes no es otra cosa, pues, que el intento de regresar al intervencionismo del pasado: no hay tal nuevo modelo en la actualidad sino ese conjunto variopinto de empresas privatizadas y jueces corruptos, estabilidad monetaria y funcionarios públicos que actúan a discreción, presidentes que cambian la constitución para reelegirse mientras intentan disminuir el riesgo país y atraer capitales extranjeros.

Las carencias del proceso de reformas se manifestaron así, básicamente, en el problema del cambio institucional. Imperó en muchas partes un personalismo que se nutre del profundo resabio caudillista que viene arrastrando la región desde su independencia, lo cual contribuyó a no hacer muy efectiva la división de poderes, a conformar un sistema judicial politizado y poco confiable y a que se mantuvieran ciertos vicios institucionales que desfavorecían la inversión y el crecimiento: excesivas regulaciones, tendencia a establecer acuerdos mercantilistas entre ciertos grupos económicos y los gobiernos, a transferir monopolios públicos a manos privadas y, en conjunto, a manejar la economía y la sociedad como en las épocas del populismo y el intervencionismo económico estatal.

El entorno institucional, entonces, no resultó el más apropiado para que se aprovecharan las condiciones de estabilidad monetaria y mejor manejo fiscal que se habían conseguido. Un indicador clave de esta situación es que los capitales locales que se habían refugiado en el extranjero no regresaron, salvo marginalmente, a sus países de origen: la gente mantuvo su desconfianza ante un entorno que siempre retenía márgenes elevados de riesgo institucional y de discrecionalidad política. Y, hablando con sinceridad, la historia mostró que quienes así desconfiaban tenían toda la razón: ¿es que acaso los argentinos, venezolanos o brasileños que cambiaron sus dólares para

traerlos al país salieron beneficiados cuando luego, debido a monumentales devaluaciones, se licuaron prácticamente sus capitales y sus ahorros?

Las razones que impidieron que se realizaran las reformas estructurales no son fáciles de resumir, pues se relacionan prácticamente con todos los planos de la vida social: tienen que ver, directamente, con la oposición que manifestaron grupos de intereses creados -como sindicatos o empresarios proteccionistas- a cualquier medida que afectara sus intereses. Pero ésta es sólo una pequeña parte del problema, que quizás hubiera podido ser manejada con facilidad si otros elementos no hubiesen estado presentes: tradiciones culturales de larga data, que provienen a veces de la época colonial o del caudillismo y la anarquía del siglo XIX, posiciones ideológicas sustentadas por una intelectualidad que se resistió a cambiar su modo de pensar, enraizado en la prédica marxista o socialista de las décadas anteriores, la propia inercia de la burocracia estatal y muchos factores más, entre los que no cabe olvidar el de una opinión pública formada en años de populismo y nacionalismo económico, acostumbrada a los controles de precios, los subsidios y los aumentos generales de salarios dictados por decreto.

A pesar de esta larga lista de factores retardatarios, que apenas hemos esbozado, no debemos sentirnos demasiado pesimistas frente a las posibilidades que se abren ante nosotros: el tránsito hacia la modernidad y la apertura ha tropezado sin duda con inmensas dificultades en todas las naciones y, sobre todo, ha sido siempre un trayecto largo, accidentado, muy poco semejante al de una autopista y más bien similar al de un retorcido sendero de montaña. Recordemos brevemente algunos casos: la lenta construcción de un estado de derecho en Inglaterra, que culmina con la Revolución Gloriosa de 1688, pero a la que hay que agregar la denodada lucha que tuvo que darse para la derogación de las Leyes de Granos (*Corn Laws*) en la primera mitad del siglo XIX; el proteccionismo y la falta de transparencia electoral que caracterizaron a los Estados Unidos durante muy largo tiempo; los regímenes autoritarios que soportaron japoneses y alemanes, volcados además hacia formas de autarquía o de nacionalismo económico que tan bien conocemos nosotros; las revoluciones, las dictaduras y el fuerte intervencionismo estatal en la economía por los que han atravesado Francia, España, los países del Este europeo y del Lejano Oriente que hoy recorren con aparente suavidad el camino del desarrollo económico en un entorno de estabilidad política democrática.

En ninguna parte, pues, la afirmación de las libertades políticas y económicas ha sido fácil o sencilla, breve y rápidamente consolidada; no deberíamos esperar que en América Latina fuésemos la excepción a esta regla, validada por una experiencia internacional de siglos en todos los continentes. No somos fatalistas, claro está, pero esta comparación nos prepara para interpretar en su adecuado contexto nuestros problemas: Latinoamérica no presenta problemas singulares, completamente distintos al de otras sociedades, y de nada sirve caer en una autocrítica despiadada que nos desvalore y nos lleve a la parálisis ante los muchos problemas que soportamos. Nuestros países no están condenados al fracaso por su pasado, pero tampoco, es bueno

recordarlo, tienen asegurado su tránsito hacia la modernidad, hacia el desarrollo económico y la libertad. Necesitamos luchar por estos valores, proseguir una tarea histórica que, en el mejor de los casos, sólo comienza a dar sus frutos después de las decenas de años que implica la transición. Como bien lo dice Mario Vargas Llosa: "El futuro depende de nosotros -de nuestras ideas, nuestros votos, y de las decisiones de quienes nosotros colocamos en el poder".

En cada caso, sin embargo, el camino tiene sus peculiaridades, sus riesgos, sus puntos de inflexión propios que es conveniente conocer y dominar. Muy diferentes son los problemas que enfrenta la economía petrolera de Venezuela que los de un México ya integrado en la zona de libre comercio de América del Norte, del pequeño Uruguay de sólidas tradiciones democráticas o de un Ecuador que ha dolarizado su economía pero se debate en una tradicional oposición entre la costa y la sierra y está regido ahora por un gobierno de corte populista.

Más allá de esta diversidad, sin embargo, no puede desconocerse que las reformas pendientes favorecerían no sólo el crecimiento económico, sino también la estabilidad política y la consolidación de la democracia, en un circuito de retroalimentación que no está funcionando hoy en día en varios países pero que puede llegar a consolidarse en no demasiado tiempo. De este modo se podría salir del círculo vicioso en que están atrapadas algunas naciones, como Venezuela por ejemplo, en el que la pobreza estimula la demagogia, la demagogia engendra el atraso, y el país va retrocediendo mientras pierde las esperanzas y las energías para emprender el cambio.

Para lograrlo sería preciso mantener las formas políticas democráticas pero entendiendo que la democracia no debe nunca convertirse en la tiranía de las mayorías, siempre volátiles y generalmente poco dadas a aceptar la dura realidad de la economía. Esto supone reafirmar la división de poderes, eliminar en lo posible las tendencias al personalismo presidencialista, buscar un poder judicial autónomo y crear una administración pública de funcionarios de carrera, ordenada y eficaz, y no un botín que se entrega al triunfador electoral.

Nada esto es fácil de hacer, se entiende, pero habría ante todo que comenzar por aceptarlo como un punto útil de partida, como un compromiso al que pudieran suscribir todas las fuerzas políticas importantes de cada país. En un ambiente que así mejoraría políticamente podrían dar mayores resultados las reformas en la seguridad social, el aumento de las inversiones públicas en sectores específicos que favorezcan la acción de los ciudadanos, la apertura de las fronteras comerciales y las privatizaciones que se hicieran, no tanto para paliar emergencias fiscales sino con el objeto de revitalizar las economías cambiando el balance entre el estado y la sociedad civil.

En cada país, en cada circunstancia, es preciso detectar los puntos clave por los cuales conviene comenzar -pues en cada momento existen problemas coyunturales que deben ser atendidos de modo ineludible- pero siempre cuidando de que las decisiones que se tomen hoy no resulten incompatibles con la idea de crear un nuevo modelo de sociedad

hacia el más largo plazo. Sólo una conducción política madura y con una formación adecuada puede detectar estos puntos, ganando dividendos a corto plazo -como es lógico- pero sin descuidar la construcción de un futuro mejor.

#### 4. El renacer del populismo y el papel de los liberales

Al leer las frases anteriores muchos lectores pensarán que el autor de estas líneas ha perdido por completo la noción de la realidad y traspasado la línea que la divide de la fantasía. Parece una ingenuidad mayúscula pensar en "conducciones políticas maduras" cuando el continente es recorrido por enardecidos populistas que pregonan un mensaje de burdo igualitarismo, de regreso al pasado y culto a la envidia social, reviviendo en ocasiones hasta la prédica de la lucha de clases del marxismo y abogando por un socialismo del más puro estilo castrista. Pero aunque esto sea cierto conviene recordar, en primer lugar, que también tenemos en la región fuerzas políticas diferentes, más moderadas por lo menos, y que los deseos de alcanzar plenamente la modernidad son parte también de las tradiciones de nuestros pueblos y promesa no cumplida de muchos movimientos políticos anteriores.

En segundo lugar este programa de reformas, tan lejano como pueda parecer hoy a muchos, marca sin embargo un horizonte a alcanzar, unas metas no utópicas con las que podemos comprometernos quienes pensamos que la libertad es el eje fundamental alrededor del cual puede lograrse la paz y el bienestar. Para decirlo más directamente, pienso que los liberales de nuestra región tenemos un compromiso que es no sólo teórico e intelectual sino también político, o por lo menos más próximo a las decisiones que se toman en la práctica política cotidiana. La situación en algunos países nos indica claramente que vivimos tiempos difíciles, de inmensos riesgos, y que sería peligroso para la libertad si permaneciésemos en nuestras universidades e institutos, asistiendo a seminarios y elaborando *papers*, sin intentar proyectarnos hacia el confuso mundo de la realidad política en el que nos movemos.

Dos elementos importantes debemos considerar a este respecto: el primero tiene que ver con las ventajas que nos proporcionan las debilidades del adversario al que tenemos que enfrentar; el segundo, en cambio, se refiere a las limitaciones de nuestro mensaje y al desafío que implica adaptarlo a las circunstancias culturales y políticas del mundo de hoy.

A pesar de todo el fervor que suscita, del amplio apoyo que a veces puede concitar, el populismo latinoamericano no es más que una experiencia fracasada en la vía de obtener el desarrollo económico y una mayor igualdad social. La idea de lograr un buen ritmo de crecimiento por medio del nacionalismo económico no ha logrado resultados positivos en ninguna parte del mundo, y menos en nuestra región. La industrialización sustitutiva, eje central de esa política, ha tropezado con la dificultad insalvable que se produce cuando se intenta pasar a la etapa de producir bienes complejos, que requieren de insumos muy específicos y de una tecnología avanzada. Sin una adecuada conexión

con el mundo exterior, sin un mercado de capitales abierto y confiable no se puede superar esta primera etapa -la llamada sustitución "fácil"- que en nuestra región se completó en la mayoría de los casos hace ya más de un cuarto de siglo, cuando no antes.

El entusiasmo con las políticas redistributivas, que se construyen siempre sobre la base de fuertes impuestos y de amplios subsidios al consumidor, ha resultado también una ilusión de perniciosas consecuencias. Por una parte ha obligado a mantener un nivel de gasto público inconsistente, por lo elevado, con la magnitud de las economías locales. Quienes han pensado que podíamos copiar el estado de bienestar en nuestras sociedades han tropezado con una aguda carencia de recursos y, cuando han insistido en esa meta, se han encontrado entonces con déficit fiscales crecientes y un endeudamiento externo imposible de manejar. Lo que pueden hacer las ricas sociedades europeas o de América del Norte sencillamente no está a nuestro alcance: no tenemos los recursos para pagarnos el lujo de procurar desde el estado un nivel de bienestar social que no estamos en condiciones de financiar.

Estas políticas de izquierda, más o menos populistas o socialistas, se encuentran siempre así con las barreras que les impone la realidad. Pero, a pesar de sus limitaciones y de sus recurrentes fracasos, retornan una y otra vez, producen nuevas adhesiones cuando más se tiende a descartarlas, encuentran de algún modo fuerzas para renacer a pesar de los pocos resultados concretos que producen. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esa desconcertante capacidad de obtener mayorías, de despertar las ilusiones de los más pobres, quienes son generalmente los primeros perjudicados de sus errores?

En este punto se impone que hagamos una reflexión, en cierto modo lateral, sobre la naturaleza misma de lo que es la política. Las personas definen sus adhesiones políticas gracias a una combinación compleja de elementos racionales, y si se quiere lógicos, pero también de sus emociones y sus actitudes afectivas. Se elige a uno u otro candidato según las impresiones que despierta su personalidad, de acuerdo a simpatías y antipatías que se crean a través de su trayectoria, sus gestos, sus mensajes explícitos e implícitos. Hay una especie de magia en eso que llamamos carisma, en la emergencia de un líder o un dirigente, en la forma en que se perciben los mensajes que se transmiten.

Una misma política, fracasada una y mil veces, puede parecer así de pronto realizable y esperanzadora si se la presenta rodeada de tonos adecuados, sobre todo si coincide con lo que inconscientemente cree la población, con ideas poco elaboradas pero que parecen plausibles, con medidas que suenan justas y oportunas aunque el análisis racional muestre su incapacidad para resolver cualquier problema. Si los precios de las mercancías o los intereses suben, la gente, casi automáticamente, piensa en imponer controles que detengan su escalada; ante la visión espantosa de la pobreza pocos son los corazones que no se conmueven y proponen que el estado entregue recursos a los más desposeídos; los servicios públicos de toda naturaleza se perciben como cosas

necesarias, a las que todos tenemos derecho, que deben estar al alcance de nuestros bolsillos, aunque haya entonces que subsidiarlos; en fin, un político que muestre su simpatía por los problemas de la gente corriente, proponga lo que proponga, logra más adhesiones que otro que aparezca tal vez más distante, o intelectualizado, o diferente.

Los líderes populistas, el propio mensaje que propagan, poseen así una cierta magia que no pueden reclamar para sí quienes son vistos como tecnócratas fríos o distanciados de la gente. Los programas complejos, las estadísticas, la lógica implacable de la economía, son vistas con desconfianza por quienes temen ser engañados y buscan ante todo un mensaje que haga despertar sus sueños latentes. "*Basta de realidades! Queremos ilusiones!*", dice sardónicamente un grafiti que se ha visto algunas veces en varias capitales latinoamericanas.

Los liberales, a este respecto, estamos en una evidente desventaja frente a nuestros adversarios. Hablamos de tasas de crecimiento del PIB, de equilibrio en las cuentas fiscales, del imperio de las leyes y no de las personas, de un mundo que no sólo es poco comprensible sino que además resulta frío, lejano, poco atractivo para el ciudadano corriente. No ha sido siempre así. El pasado de las luchas por la libertad muestra que los liberales clásicos llegaron a despertar enorme entusiasmo cuando se trataba de eliminar los privilegios de la nobleza, de impulsar la economía libre, de buscar un régimen de derecho que permitiese la mayor participación de los ciudadanos.

No se trata, por cierto, de regresar al pasado o de copiar el discurso o el estilo de los populistas, de diluir nuestro mensaje con frases vacías pero grandilocuentes que conciten adhesión. De nada sirve renunciar a nuestras ideas para ganar apoyo, o de suavizarlas de modo tal que resulten ya irreconocibles. Pero es preciso encontrar un lenguaje que permita comunicarnos con el hombre de la calle, reinventando el mágico poder de la esperanza y de los deseos colectivos.

Sabemos que esto resulta más fácil decirlo que hacerlo, y que las dificultades y las tentaciones del camino de la política no son para todos sino para aquéllos que posean una vocación muy especial. Pero todos, en cualquier caso, podemos hacer el esfuerzo de divulgar nuestras ideas de un modo atractivo, de tratar de conectarnos con las aspiraciones más profundas de la gente, de colaborar con los que se deciden a luchar para evitar que nuestra América siga recorriendo una vía contradictoria de éxitos efímeros y recurrentes fracasos.